



José Luis Rodríguez Zapatero, con la actual presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. AFP

Feijóo reaviva el choque con el chavismo al cuestionar su gestión de los terremotos

«Cuidado con mandar ayuda humanitaria al Gobierno de Delcy Rodríguez», avisó el líder de los populares esta semana

PEDRO MARÍN
Madrid

La cuestión venezolana ha generado continuos enfrentamientos entre el Gobierno de España y la oposición desde que Pedro Sánchez llegó al poder. Los vínculos entre el Ejecutivo y el régimen chavista, encabezado hasta este año por Nicolás Maduro y posteriormente por Delcy Rodríguez, han sido un eje de confrontación constante con el que el Partido Popular ha tratado de arremeter contra el Gobierno. La amistad entre el exministro de Transportes José Luis Ábalos y el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero es sólo la punta del iceberg de un entramado de relaciones, que actualmente está siendo investigado, y con el que los populares han intentado erosionar la imagen de Sánchez a lo largo de la legislatura.

No obstante, los dos terremotos que padeció el país iberoamericano hace ya una semana limitaron los mensajes, de uno y otro lado, a lo estrictamente humanitario. Pero la gestión que está haciendo el Gobierno liderado por Delcy Rodríguez de la catástrofe ha vuelto a situar la cuestión en el centro de las críticas. Los ciudadanos venezolanos reprochan que el

aparato estatal chavista esté siendo un obstáculo, más que una ayuda, a la hora de atajar las grandes consecuencias humanas y estructurales que está sufriendo Venezuela. Un asunto que ha reavivado la indignación de los populares, que han vuelto a cargar contra el ejecutivo venezolano respaldado por Estados Unidos.

«Cuidado con mandar ayuda humanitaria al Gobierno de Delcy Rodríguez», avisó Alberto Núñez Feijóo esta semana, pidiendo que la ayuda humanitaria llegase a organizaciones «incuestionables». Así, el presidente del PP puso de nuevo el foco de la sospecha sobre el régimen chavista, y extendió la sombra de la duda sobre Delcy y sus ministros, en un momento tan delicado como el que vive el país. «Ese país ha sido devastado por la dictadura, y ahora queda acreditado que el expolio que ha sufrido lo ha sufrido en todo: en sus infraestructuras, en la falta de protección civil que tiene el Estado o la falta de un ejército que auxilie a la población», censuró el líder popular el pasado jueves.

Acusaciones de abandono

Los cientos de testimonios que han recogido los medios de comunicación de las personas afectadas por los seísmos coinciden en la misma denuncia: las primeras 72 horas estuvieron prácticamente «abandonados» por el Estado venezolano, ya que era complicado encontrar funcionarios públicos dispuestos a ayudar a las víctimas o heridos. «Ni siquiera papel y bolígrafo para apuntar los nombres de los cadáveres». Unas acusaciones que negó

la propia presidenta venezolana, argumentando que el despliegue de funcionarios fue inmediato y descargando la responsabilidad del caos de las primeras horas sobre los «laboratorios mediáticos».

Lo cierto es que el Gobierno de España, con el Ministerio de Asuntos Exteriores dirigido por José Manuel Albares a la cabeza, está volcándose con el país iberoamericano a la hora de proporcionar recursos humanos y materiales para prestar apoyo a los afectados, pero aún no ha emitido ninguna valoración en términos políticos. En realidad, el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez siempre ha contemporizado a la hora de pronunciarse y condenar los abusos y los déficits democráticos del sistema chavista, mientras que el PP, por su parte, ha tratado de poner el acento en esa tibieza a la hora de colocarse enfrente de lo que consideran un régimen autoritario.

La prueba más ilustrativa de ello fue el desenlace de las últimas elecciones que se celebraron en Venezuela. Nicolás Maduro se mantuvo en el poder, a pesar de que el veredicto se dictaminó sin la publicación de todas las actas detalladas del escrutinio, y con serias dudas sobre la veracidad del resultado. En cambio, el candidato de la oposición, Edmundo González acabó exiliándose a España por motivos de seguridad, en un traslado en el que España jugó un papel fundamental y que el Gobierno enmarcó en una gestión de carácter humanitario para garantizar su seguridad, después de que González solicitara asilo político.

La diáspora arrojadiza

Feijóo se ha metido en el jardín equívoco y absurdo de sembrar dudas sobre el voto exterior en su ansiedad por llegar al poder y competir con el marco político de Vox

ENTRE LÍNEAS
ALBERTO SURIO



Vivimos un momento de enorme confrontación marcado hace demasiado tiempo por la hiperventilación. El cerco judicial sobre Pedro Sánchez y su entorno político se estrecha progresivamente. Con independencia del desenlace de las investigaciones en curso y del respeto debido a la presunción de inocencia, su dimensión política resulta ya innegable y condiciona cada vez más la capacidad del presidente para controlar los tiempos de la legislatura.

En paralelo, el PP sigue aproximándose estratégicamente a Vox. El reciente pacto alcanzado en Andalucía, que ha permitido a Juanma Moreno Bonilla garantizar la estabilidad de su Gobierno, confirma que marcos políticos hasta hace poco exclusivos de la formación de Santiago Abascal empiezan a ser asumidos con naturalidad por el principal partido de la oposición. No puede entenderse al margen de ese desplazamiento la polémica abierta ahora sobre el voto de los nuevos españoles residentes en el exterior.

La llamada Ley de Nietos ha dejado de ser un debate exclusivamente ideológico para convertirse en un hecho político de considerable magnitud. Desde su entrada en vigor, en octubre de 2022, hasta el 31 de diciembre de 2025, la red consular española recibió 1.117.805 solicitudes de nacionalidad al amparo de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática. De ellas, 510.532 expedientes habían sido aprobados y 272.862 personas ya habían sido inscritas como españolas en los registros civiles consulares. Para hacer frente a esa avalancha de solicitudes, el Estado tuvo que reforzar los consulados con 657 nuevos efectivos solo en 2025, un 43% más que el año anterior.

Estas cifras no describen una política testimonial ni una concesión simbólica: hablan de una de las mayores ampliaciones de la ciudadanía española desde la recuperación de la democracia. Detrás de cada expediente hay una historia familiar vinculada a la emigración, al exilio o a las limitaciones de una legislación que durante décadas impidió transmitir la nacionalidad en condiciones de igualdad.

Es precisamente aquí donde aparece la contradicción política. El Partido Popular votó contra la Ley de Memoria Democrática y prometió derogarla por considerarla una

norma sectaria e innecesaria. Sin embargo, nunca ha explicado con claridad si esa derogación incluiría también la supresión del derecho reconocido a cientos de miles de nuevos españoles o si mantendría intacta la denominada Ley de Nietos. Esa ambigüedad no es un matiz técnico; es una cuestión de coherencia política.

La política democrática exige algo más que eslóganes. Exige distinguir entre aquello que se considera inaceptable y aquello que merece permanecer. Porque cuando una ley ha generado más de un millón de solicitudes y ha incorporado ya a más de medio millón de personas a la ciudadanía española, sembrar dudas sobre la legitimidad de su voto sin aportar pruebas concluyentes deja de ser una crítica política para convertirse en una forma de erosionar la confianza en las reglas del juego. La diáspora no debería convertirse nunca en un arma arrojadiza.

Feijóo ha intentado resolver esa contradicción asegurando que no cuestiona el acceso a la nacionalidad de los descendientes de españoles, sino las supuestas maniobras del Gobierno para alterar el censo electoral. Pero al hacerlo ha terminado introduciendo un relato político muy próximo al que Vox lleva tiempo alimentando: la sospecha sobre la legitimidad del voto de esos nuevos ciudadanos y, en último término, sobre la propia configuración del cuerpo electoral. Es una lógica conocida. Primero se cuestiona el procedimiento; después, el resultado. Y, finalmente, el propio sujeto de la soberanía. Un planteamiento que recuerda a las estrategias de deslegitimación electoral utilizadas por el trumpismo y otras derechas radicales.

Los aires del pulso internacional frente a la marea ultra soplan con fuerza. El propio Sánchez podría tener la tentación de inspirarse en el calendario europeo antes de decidir cuándo convocar las elecciones generales. Una coincidencia con la primera vuelta de los comicios presidenciales franceses, fijada para el 18 de abril de 2027, tendría un evidente valor simbólico en un momento en el que Francia volverá a convertirse en el gran laboratorio europeo para medir la fortaleza de la extrema derecha. Es solo una hipótesis, pero Francia ha anticipado en otras ocasiones tendencias políticas que después se han extendido al conjunto del continente.